JUZGADO DOCE CIVIL DEL CIRCUITO

Bucaramanga, tres (3) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Ref. Incidente de desacato L.E.H. vs. La Nueva EPS. Radicación No. 2021-00773-01.

Se decide el grado jurisdiccional de consulta de la sanción impuesta mediante auto del 17 de febrero de 2022, dentro del asunto de la referencia, por el Juzgado Veinte Civil Municipal de Bucaramanga, a la gerente y representante legal de la Regional Nororiente de la Nueva EPS, Sandra Milena Vega Gómez.

ANTECEDENTES

En sentencia de enero 19 de 2022, el Juzgado Veinte Civil Municipal de Bucaramanga, concedió el amparo deprecado y, en consecuencia, ordenó a la Nueva EPS que, en el término de cuarenta y ocho horas, “(...) autorice y garantice la realización del servicio médico denominado “Terapia de análisis de Comportamiento Aplicado ABA” con una intensidad de 3 horas diarias de lunes a viernes durante 4 meses, para un total de 240 horas (...)” y “(...) proceda a cubrir los costos del servicio de transporte al menor L.E.H. identificado con el NIUP 1.139’128.410 y de un acompañante, o a suministrar el mismo, al municipio donde se encuentren ubicadas las instituciones donde se realizan las citas médicas, controles, terapias y exámenes, requeridos para el tratamiento de las patologías que padece “Trastorno del lenguaje expresivo” y “Otros trastornos generalizados del desarrollo”, siempre y cuando, tengan que desplazarse fuera del municipio donde está su residencia; de no realizar lo anterior, deberá la NUEVA EPS-S cancelar y/o reembolsar los gastos que por este concepto realice el accionante, conforme lo expuesto en la parte motiva de este fallo (...)” (folios 22 y 23, archivo 1, c. 1).

La agente, sin embargo, dio aviso del incumplimiento del fallo, razón por la cual, se dio apertura formal al incidente de desacato contra Sandra Milena Vega Gómez, gerente y representante legal de la Regional Nororiente de la Nueva EPS (archivo 2, c. 1), quien, a través de la apoderada especial de la empresa, alegó, respecto a las terapias de análisis de comportamiento aplicado, que se generaron autorizaciones por 3 meses en la IPS Asopormen, e indicó que “(...) el área técnica de salud (...) se encuentra validando el caso, recolectando soportes y gestionando el servicio de salud petitionado y ordenado en fallo de tutela (...)”. (archivo 4, C. 1).

Decretadas las pruebas (archivo 5, c. 1), la EPS informó que las terapias requeridas iniciaron el 14 de febrero del año en curso (archivo 7, c. 1), pero la abuela del menor, tras ser indagada por el Despacho, señaló que pese que las terapias iniciaban el 16 de febrero, debieron posponerse hasta el día 21, toda vez que la EPS no ha definido el transporte para el traslado del menor junto con su acompañante y carecen de medios económicos para sufragarlos directamente (archivo 8, c. 1).

El juez de primer grado sancionó a Sandra Milena Vega Gómez con el pago de una multa equivalente a los cinco (05) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha del auto (archivo 9, c. 1), porque, explicó, “(...) no allegaron prueba de haber cumplido en su totalidad con la orden judicial (...), ya que solo se han autorizado las terapias de comportamiento (...), pero no han brindado la prestación del servicio de transporte para que el menor agenciado y su acompañante puedan asistir a las terapias, pues (...) solo señalaron que habían requerido a las áreas correspondientes para que informaran cuáles gestiones se han realizado respecto al cumplimiento del fallo (...), sin que el mismo se haya materializado en su totalidad (...)” (pdf 10 c. 1).

CONSIDERACIONES

Por sabido se tiene que “[l]a sentencia que se profiere en virtud de una acción de tutela no sólo goza de plena fuerza vinculante, propia [efectivamente] de toda decisión judicial, sino que, al

encontrar fundamento directo en la Constitución Política que la instituyó de modo específico para la guarda y protección de los derechos fundamentales, reclama la aplicación urgente e integral de lo ordenado, comprometiendo a partir de su notificación, la responsabilidad del destinatario de ese mandato judicial, so pena de incurrir en las sanciones previstas en la ley (...)" (C.S.J. Sal. Cas Civ. Auto ATC14 25 de julio 16 de 2018. Exp. 2017-00391-01), que no son otras que las contempladas en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, norma que establece:

"La persona que incumpliere una orden de un Juez proferida con base en el presente decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales, salvo que en este decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar".

En ese orden de ideas, la sanción habrá de imponerse cuando el destinatario de la tutela no cumple la orden impartida en la sentencia, de ahí que la actuación del juez a cargo del incidente "(...) se encuentre delimitada por la parte resolutive de la decisión que se acusa de incumplida, limitación con la que, entonces, le corresponde constatar los aspectos relacionados con el destinatario de la orden, su contenido y el término otorgado para su cumplimiento" (C.S.J. Sal. Cas Civ. Auto ATC1425 de julio 16 de 2018. Exp. 2017-00391-01).

Empero, "(...) es deber del juzgador ocuparse no solo del aspecto objetivo, cual es el hecho del incumplimiento del fallo de tutela, sino también del factor subjetivo, dado que la desatención que se censura es aquella que proviene de una actitud consciente y voluntaria de parte de quien debía cumplir la orden de protección, de modo que se impone atender elementos propios de un régimen sancionatorio, como lo atinente a la culpa con que haya actuado el funcionario, su intención de desobedecer y las posibles circunstancias de justificación" (C.S.J. Sal. Cas Civ. ATC1425 de julio 16 de 2018. Exp. 2017-00391-01).

Luego, "(...) el solo incumplimiento per se no comporta una evidente afrenta a la decisión del juez constitucional, pues se requiere de una manifiesta desatención a la orden emitida, lo que exige corroborar la exteriorización de conductas dirigidas a evitar de alguna manera acatar el fallo, lo que haría surgir, claramente, un ánimo eminentemente subjetivo que el juzgador (...) debe valorar en cada caso en particular, sopesando, itérase, si aflora en el funcionario acusado ese interés interno para apartarse de la decisión protectora" (C.S.J. Sal. Cas. Civ. Auto del 14 de septiembre de 2009. Exp. 2009-01417-00).

Pues bien, examinados, bajo ese entendido, los medios de prueba obrantes en el plenario, salta a la vista que la sanción impuesta a la gerente fue del todo acertada, pues, es lo cierto, no se acreditó la efectiva prestación del servicio de transporte ordenado en el fallo de tutela, tanto para el paciente como su acompañante, con el fin de acudir a las terapias que efectivamente le fueron autorizadas y agendadas.

No basta, entonces, con la autorización y agendamiento de las terapias, si el transporte para asistir a las citas no le es garantizado en los términos definidos por el fallo.

Véase, precisamente, que en las respuestas presentadas por la Nueva EPS, sólo se indicó que el área encargada se encontraba validando el caso y gestionando el servicio, sin embargo, no fue arrimada prueba alguna que diera cuenta de su efectiva prestación.

Muy por el contrario, la abuela del agenciado, en llamada telefónica, le informó al juzgado de instancia que las terapias no pudieron iniciarse en tiempo porque la EPS no definió lo relativo al traslado, careciendo además de recursos propios para sufragarlo directamente (archivo 8, c. 1).

Situación que es reafirmada por la misma señora en contacto telefónico del 1º de marzo de 2022 (archivo 3, c. 2), quien informó al juzgado que recibió una comunicación indicando que se encontraba autorizado el servicio de transporte para el 28 de febrero pasado, sin embargo, al cuestionarle por los demás días no recibió respuesta.

Indicó, además, que los gastos de transporte de las primeras terapias fueron cubiertos con recursos propios, sin embargo, reiteró que no cuenta con los medios económicos para continuar cubriendo los traslados.

Por ende, si la finalidad del incidente de desacato la constituye “(...) la eficacia de las órdenes proferidas tendientes a proteger los derechos fundamentales reclamados” (C.S.J. Sal. Cas. Civ. Auto ATC1401 de julio 12 de 2018. Exp. 2016-00304-03), justificada resulta la sanción impuesta a la funcionaria accionada, puesto que nada ha hecho para dar cumplimiento al fallo en las precisas condiciones en que se impartió, lo que conduce a confirmar el proveído consultado, sin que ello exima a la EPS de cumplir la orden del juez.

Sin embargo, será revocado el numeral 3º de la providencia consultada, por cuanto, no se evidencia actuar alguno del dirigente acusado que amerite la compulsión de copias para que sea investigado penalmente, máxime si ya se está imponiendo una sanción correctiva frente a la conducta que derivó el no acatar el fallo.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el suscrito Juez Doce Civil del Circuito de Bucaramanga,

RESUELVE:

PRIMERO. - REVOCAR el numeral CUARTO del aparte resolutivo del auto proferido el 17 de febrero de 2022, dentro del asunto de la referencia, por el Juzgado Veinte Civil Municipal de Bucaramanga.

SEGUNDO. - CONFIRMAR en lo demás la providencia de fecha y procedencia anotadas.

TERCERO. - NOTIFICAR esta decisión a las partes por la vía más expedita.

CUARTO. - ORDENAR la devolución del expediente al juzgado de origen, para que haga efectiva la sanción.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

Firmado Por:

**Hernan Andres Velasquez Sandoval
Juez Circuito
Juzgado De Circuito
Civil 012
Bucaramanga - Santander**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

c23a54873e5b636033d1ab1a6661bdec64fa59da9be940702718104654a7dfa3

Documento generado en 03/03/2022 10:26:35 PM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**